

1977-1980

¿Surge el pacto del Cono Sur?

Antonio Cavalla Rojas

Nos hemos acostumbrado a agrupar bajo la denominación de Cono Sur de América Latina a esa extensión territorial de alrededor de 15 millones de kilómetros cuadrados que comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y a realizar generalizaciones sobre los procesos que ocurren en las muy diversas formaciones sociales nacionales allí incluidas. Sostenemos habitualmente que las "dictaduras militares del Cono Sur" tienen una ideología de la seguridad nacional o que sustenten un modelo económico, el que se supone, por lo demás, que entrega las economías "a las transnacionales estadounidenses".

La abundante información y análisis sobre la región que ha ido entregando a sus lectores unomásuno durante estos tres años de tarea esclarecedora, nos facilita el intento de realizar un recuento de estos mil y tantos días en los países del Cono Sur. Descubrir las especificidades y los rasgos comunes principales de los procesos nacionales y su forma de inserción a nivel mundial resulta particularmente importante para las voluntades democráticas de América Latina, pues al interior de ellas se pueden identificar los grupos más coherentemente totalitarios y agresivos del subcontinente que buscarán engarzar sus proyectos con las fuerzas neoconservadoras que están detrás de la próxima administración de Ronald Reagan.

Empezaremos por Chile, por cuanto el régimen de ese país ha tendido a ser mostrado como el prototipo de los países del Cono Sur, por lo que resulta útil presentar inicialmente al lector los cambios más importantes ocurridos allí, y utilizarlos como matriz comparativa con el resto de los países. Entre 1977 y 1980, luego de sucesivos tratamientos de shock, se despliega en plenitud la política económica del equipo de asesores del general Pinochet, todos ellos de raíces "friedmanianas". Culmina el proceso de concentración del capital y la gestión empresarial en una treintena de grupos económicos nacionales y extranjeros, que abarcan prácticamente toda la banca privada, la casi totalidad de las grandes empresas industriales competitivas en el mercado mundial, los grandes consorcios de comercialización interna y externa y los medios de comunicación de masas. Se consolida un importante sector capitalista agroindustrial ligado al mercado externo. El Estado mantiene en su poder un pequeño sector de empresas consideradas "rentables o estratégicas" (incluidas parte de las del cobre). Los terratenientes expropiados por el gobierno de Allende pasan a constituir un sector marginal de la economía, al igual que la burguesía industrial que floreciera bajo el modelo de sustitución de importaciones, la que se ve disminuida por quiebras o subsiste ligada al sector dinámico arriba mencionado. En el campo del pueblo esto produce profundos impactos. Ha disminuido en términos relativos la clase obrera; ha emergido un sector de proletariado agrícola, inexistente antes en Chile; se ha generado un amplio ejército de reserva urbano y rural. La rearticulación de una economía campesino-minifundista junto a un latifundio disminuido —contrarreforma agraria mediante— se orienta a la subsistencia del campesinado y a la producción de alimento barato para la fuerza de trabajo.

El régimen político ha cambiado sustancialmente. La pretendida fragilidad de la dictadura militar —que aún en 1979 predicaba con tanto ahínco la izquierda chilena exiliada— ha sido remplazada por la imagen de consolidación de un régimen autoritario, cuyo basamento es la alianza del sector dirigente de la burguesía mo-

nopólica y agroindustrial y la cúpula militar, los que han entregado por nueve años, el papel de árbitro máximo al dictador Augusto Pinochet, y que se reservan en la Constitución aprobada el 11 de septiembre último, las palancas principales del poder por un periodo de 15 años. No hay programa "democratizador" hasta 1995...

En Argentina, la política económica de la junta militar se inclinó definitivamente por colocar como eje principal de la acumulación capitalista a la producción agraria y pecuaria, único sector con el que cuenta el país con ventajas comparativas en el mercado mundial. Se reinvirtió drásticamente la industrialización para el mercado interno, e incluso no se efectuaron medidas tendientes a incrementar otro tipo de exportaciones industriales, como ocurrió en Chile y en la mayoría de los países latinoamericanos. El grupo de empresas que más se expandió en estos tres años y que constituye el sector más dinámico, es el derburguesía nacional vinculada al sector agropecuario. El espacio disponible para los granos y la carne argentina, generó una importante inyección de *agrodólares*, que se volcaron al mercado financiero y a la compra de empresas industriales rentables. El capital internacional se ha instalado —aprovechando el esquema de puertas abiertas del modelo— preferentemente en el sector de la comercialización agropecuaria y en las financieras. Junto a este sector dinámico y hegemónico, subsisten fracciones burguesas que manifiestan grados diversos de oposición al modelo, tales como la burguesía agraria tradicional, la burguesía industrial y las empresas transnacionales ligadas al mercado interno, y la burocracia militar enraizada en las empresas estatales, que no han sido desnacionalizadas como en Chile. La clase obrera ha disminuido en términos relativos, las capas medias se han empobrecido y se ha generado un aumento de las actividades terciarias improductivas y de la cesantía. El régimen político sigue basándose en los altos mandos de las fuerzas armadas, en el seno de las cuales pueden identificarse facciones que tienden a representar los intereses de las fracciones burguesas en pugna. El resultado ha sido la continuación de un esquema de gobierno de las fuerzas armadas que "tiene metas, y no plazos", y la generación por la propia institución castrense de un presidente-árbitro por un periodo de cuatro años más, sin cronogramas claros de "democratización".

En Brasil, a partir de 1977, se vive más intensamente la crisis del llamado *milagro brasileño*. El notable crecimiento de la deuda externa (60 mil millones de dólares), una balanza de pagos altamente deficitaria, una inflación que supera 50 por ciento..., llevaron prácticamente a la ruptura del tríptico que supuestamente sostenía el desarrollo: las empresas transnacionales, las grandes corporaciones estatales y las corporaciones privadas internacionalizadas. Frente a la reversión del crecimiento sostenido, con su consecuente incremento de las contradicciones interburguesas y aumento de la actividad reivindicativa y política del movimiento popular, se optó por un régimen político autoritario pero con un cronograma de "democratización" que

se inicia formalmente en 1982 con la elección de gobernadores estatales— regido por una Constitución que reserva al presidente de la república la discrecionalidad de la declaración de los estados de excepción, y a las fuerzas armadas el carácter de garantes de la "seguridad y el proyecto nacionales". El movimiento popular brasileño ha ido conquistando espacios en organización y conciencia democrática en estos tres años. Ha conseguido una amnistía total a los exiliados y el reconocimiento —con límites— al derecho de existencia y organización de los partidos de oposición de los sindicatos. El periodo del gobierno Figueiredo aparece así como un interregno en el que las fracciones burguesas inician una rearticulación y en la que el campo popular lucha para hacer difícil la reversión de la democratización iniciada por la cúspide militar.

Paraguay, para sorpresa de muchos, registró un crecimiento de su producto interno bruto en estos tres años superior a nueve por ciento anual, lo que lo coloca como el primer país latinoamericano en tasa de crecimiento. Se incrementó hasta 600 dólares el ingreso per cápita anual, lo que lo ubica entre los países intermedios del subcontinente. Fue depositario de altas inversiones y préstamos extranjeros y pudo demostrar una total estabilidad cambiaria. Este crecimiento ha estado ligado a una importante penetración brasileña (y en mucho menor medida, argentina), la que se intensifica bajo los efectos de la construcción del complejo energético de Itaipú. Los sectores nacionales favorecidos por este crecimiento se ubican en la construcción, en cierta manufactura competitiva (fibras de algodón y aceite vegetal) y en la agroindustria de la soja y el algodón. Este proceso se ha realizado a costa de la expropiación y represión del campesinado indígena, del mantenimiento de bajos salarios obreros y del incremento del contrabando como elemento de la acumulación de sectores de la burguesía nacional ligada al dictador. El régimen político se presenta sin variaciones en el periodo, aunque surgen fuertes contradicciones entre las fracciones económicas generadas por el boom —con la expectativa de la llegada próxima de los *energodólares*—, entre las que juega un papel no despreciable la coalición de sectores políticos democráticos, agrupados en el llamado Acuerdo Nacional (socialdemócratas, centristas republicanos, derechistas DC y ex colorados).

En Perú, el gobierno de Morales Bermúdez terminaba de cambiar el sello populista y nacionalista de la gestión de la "revolución peruana" y preparaba las condiciones para rearticular el bloque burgués— bajo los dictados del FMI y con la ayuda del BID— y entregar el poder a un civil que continuara la tarea iniciada por los militares de relevo en 1974. En estos tres años se realizó una Asamblea Constituyente en la que el acuerdo del APRA, la derecha democristiana y las fuerzas del actual presidente, lograron aprobar una Constitución conservadora, que preserva el principio del "pluralismo empresarial" (libertad de empresa), que mantiene diversos mecanismos de legitimación de la

represión por "razones de seguridad nacional", y en la que el pueblo se limita a votar cada cierto tiempo por sus gobernantes. Se sepultan los aspectos participativos, y las únicas concesiones que logra la izquierda es la libre existencia de los partidos y el voto de los analfabetos. El triunfo logrado por Fernando Belaúnde en la elección presidencial, que cierra estos tres años, parece inaugurar un nuevo periodo, de definición de un modelo productivo inserto en la división internacional del trabajo.

En 1977 tiende a terminar en Uruguay un periodo durante el cual el régimen militar promovió una alta acumulación financiera de capitales internos y externos y una reestructuración productiva sobre la base de la promoción de la industria de exportación, orientada preferentemente a los mercados de Brasil y Argentina. A partir de ese año —como señala el economista uruguayo José Manuel Quijano— "se detectan ciertos cambios dentro de Uruguay y en la relación de éste con sus vecinos". Las barreras proteccionistas impuestas por Brasil para enfrentar su crisis, las repercusiones de la política de libre mercado implantada en Argentina, las repercusiones de los grandes proyectos hidroeléctricos impulsados en conjunto con Argentina y con Brasil, y, en los últimos meses, la participación de capitales uruguayos en la especulación financiera que se vive en Buenos Aires, fueron los hechos más significativos ocurridos entre 1977 y 1980. No ocurrieron cambios en el régimen político, aunque los militares se aprestan a hacer aprobar durante este mes una "Constitución" a la Pinochet, con las diferencias que se crea un aberrante Consejo de Estado civil y que se da a los partidos políticos tradicionales de las fracciones burguesas dominantes, la posibilidad de designar un candidato a remplazar al actual civil que ostenta el cargo honorífico de presidente de la república.

Como señalara hace poco el dirigente Carlos Toranzo, Bolivia, "durante los últimos años, ha vivido un 'extraño' clima electoral". Desde la primera elección fraudulenta en la que "triunfó" el candidato banerista, general Juan Pereda, hasta la última en la que venció el candidato de la Unidad Democrática y Popular, Hernán Siles, hubo tres golpes de Estado y un acto electoral más. El penúltimo golpe —el de Natusch Busch— enseñó a la burguesía y a sectores de las fuerzas armadas que el proceso democrático había avanzado demasiado lejos, lo que llevó a que el último adquiriese los ribetes de un movimiento profiláctico, más sangriento y represivo que nunca antes en la historia boliviana, esta vez dirigido fundamentalmente contra la clase obrera y el movimiento popular. El gobierno de Bánzer no había sido capaz de cambiar drásticamente el patrón de acumulación del capitalismo boliviano y dio paso a un interregno.

La importancia de que las izquierdas sean capaces de dar conducción unitaria con proyectos propios a sus pueblos, pasa a constituirse en un factor clave para impedir que se consoliden los procesos económicos en marcha. Sólo ellas pueden elevar y diversificar las luchas actuales de las masas, erigirse en factor referencial para las fracciones burguesas desplazadas y presentarse como alternativa amplia incluso para los sectores democráticos del capitalismo mundial. De ellas dependerá en gran medida que el "pacto del Cono Sur" se materialice o aborte. Si no logran aprobar su constitución —a la que apuntan las tendencias de estos tres años—, un nuevo peligro, esta vez desde el sur, se levantará sobre el destino democrático de los pueblos de América Latina.